

nes la Ley peninsular, no queda otro recurso que concentrar en manos del Gobernador General los deberes y facultades que al Rector y al Gobernador Civil encomienda respectivamente la Ley y hasta algunos de los que corresponden al Ministro. A este principio obedeció el Decreto orgánico de 1865, aprobado de Real orden y á él se adapta también el actual.

El nombre, la constitucion y atribuciones de la Junta provincial, ántes llamada superior, son iguales á los de dichas Corporaciones en la Península, con las ligerísimas variantes propuestas por el Consejo.

La Inspeccion de Escuelas era uno de los vacíos del Decreto de 1865 que mas contribuyeron á desvirtuar prontamente sus efectos, y responde aquí á las mismas conveniencias que le dieron vida en la Península. Expuesta su urgente necesidad por los Profesores mas ilustrados de la Isla, plenamente reconocida por la Diputacion provincial que la sostiene con sus fondos, fué así mismo admitida por los autores de los tres proyectos de Decreto á que se refiere el preámbulo. Ni una sola palabra de crítica suscitó su creacion en Abril último; ántes bien han sido encomiados documentos emanados posteriormente del Gobierno General en que se aludía á la Inspeccion recientemente creada. Saivo muy ligeras modificaciones en cuanto á las condiciones que han de reunir los Inspectores, por la total carencia de personal procedente de la Escuela Normal, y en cuanto al número de dos Inspectores, en vez de uno solo, por reclamarlo así imperiosamente el número total de 500 Escuelas y la dissemination de las Escuelas rurales á largas distancias unas de otras, que hay que recorrer á caballo por caminos á menudo intrasitables, todas las demás bases establecidas en este Decreto para la Inspeccion, así como el Reglamento de Inspectores que ha redactado la Junta provincial, son copia ó paráfrasis exacta de sus similares decretados por el Gobierno Supremo.

Igualmente lo son las funciones que el Decreto encomienda á las Juntas locales de los pueblos. Creadas estas en la Península por la Ley de 1857, subsisten todavía, sin que los resultados hayan aconsejado hasta ahora su supresion. Dióles vida en esta Isla el Decreto orgánico de 1865, y no solo la experiencia aboga por su continuacion, sino que el Consejo, lejos de ponerles el menor reparo, emite acerca del Secretario y del número de Vocales que han de presidir los exámenes anuales dos únicas observaciones dirigidas á hacer más rápida la accion y más solemne la representacion de las Juntas. Cada uno de los tres adjuntos proyectos, á pesar de la diversidad de criterio de los respectivos autores, mantiene también las Juntas locales con el mismo y expreso carácter que siempre tuvieron de Delegadas locales de la Autoridad Superior para velar en cada pueblo por el fomento de la instruccion. Los tres proyectos confieren igualmente á la Autoridad Superior la resolucion de los expedientes que hubieran de formarse á los Maestros, y solo disienta uno de ellos en cuanto á cuál de las dos Corporaciones, Junta local ó Ayuntamiento, tocaba formar dicho expediente, como disienta también en cuanto al nombramiento de los Maestros que correspondía en su sentir á los Ayuntamientos; pero sentadas las dos premisas precedentes, — carácter de Delegadas de las Juntas y resolucion del expediente conferida á la Autoridad Superior — el sentido comun y la lógica (á falta de la legislacion peninsular que así lo preceptúa, como reserva también el nombramiento de los Maestros á la Autoridad Superior, segun lo confesó paladinamente el autor del proyecto referido despues de prolija discusion) bastarian por sí solos para decidir la cuestion á favor de la Junta local. En efecto: suponiendo dotados de igual grado de inteligencia y celo el Ayuntamiento y la Junta local de un pueblo, claro es que esta última, no teniendo otra mision, otra razon de ser, otro objetivo que la vigilancia sobre el solo ramo de instruccion primaria, estará mas al tanto de todos los detalles del mismo y, entre ellos, del aprovechamiento de los niños y del comportamiento diario del Maestro que el Ayuntamiento, cuya atencion forzosamente tiene que extenderse á todos los demás ramos de la Administracion municipal. La Junta local estará, pues, mas en el caso que el Ayuntamiento de instruir á un Maestro, oportunamente y con conocimiento de causa, el expediente gubernativo á cuya formacion además la llama naturalmente su carácter de Delegada de la Autoridad Superior, á quien compete en definitiva la resolucion.

Si el nombramiento, separacion y formacion de expedientes á los Maestros; si la creacion y supresion de los establecimientos de instruccion primaria fueran de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos, como algunos pretenden, ¿qué intervencion les quedaría al Gobierno Supremo y á sus Delegados gubernativos respecto de un ramo tan interesante? Solo algun añejo resabio del régimen que, de hecho, ya que no de derecho, imperó en esta Isla en 1873 ha podido hacer suponer á algunos que semejante anulacion del Poder Central pudiera compaginarse con el texto de una Ley de instruccion pública que lleva la fecha de 1857, ni desprenderse del espíritu ni de la letra de una Constitucion monárquica votada en Cortes y promulgada despues de la Restauracion. Solo desconociendo en absoluto el carácter de quien tiene hoy la honra de representar en Puerto-Rico al Gobierno de S. M., é imaginando torpemente que su espíritu de tolerancia pudiera llegar hasta la debilidad y conducirle al olvido del deber, ha podido nadie sentir fuera capaz de proponerle ó consentirlo.

Pero ya que no en la Ley de instruccion pública ni en la Constitucion vigente se encuentra por ventura en la Ley municipal de Puerto-Rico alguna huella de semejantes atribuciones concedidas á los Ayuntamientos?

Por expansivo que sea el criterio con que procuro aplicarla, no puedo llegar á falsear su espíritu, ni á desvirtuar su esencia, ni á destruir con casuísticas interpretaciones el sentido de los artículos al caso referentes, cuya frecuente citacion suele ir acompañada de la supresion, harto repetida

para no ser intencionada, de ciertos incisos que cierran el paso á todos los ergotismos de Esuela.

Aceptando el criterio del Consejo de Estado en pleno, claramente consignó el legislador en el preámbulo de la Ley que entien de revestir al Gobernador General de Puerto-Rico de toda la concentracion de facultades necesarias, para que su intervencion se deje sentir expedita en todos los ramos de la administracion y sancione con su Autoridad to la iniciativa municipal.

Claramente expresa también que los Ayuntamientos son Corporaciones esencialmente administrativas y, al dejar á la libérrima eleccion del Gobernador el nombramiento de Alcaldes, establece terminantemente que, sobre el carácter que estos asumen de ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos y gestores de los intereses del Municipio, debe prevalecer el que tienen de representantes y Delegados gubernativos de la Autoridad Superior, y funcionarios del Gobierno.

Conforme con estos principios generales, el capítulo 1.º que trata especialmente de las atribuciones de los Ayuntamientos, declara en el artículo 69 que son de la competencia de estos, pero con sujecion á las Leyes, entre otros objetos, las Instituciones de instruccion y al final del mismo artículo añade que el Gobernador General velará por el cumplimiento de esta parte de la Administracion en virtud de las facultades que le conceden las Leyes. En el siguiente artículo 70, entre los servicios que en particular tienen los Ayuntamientos la obligacion de atender, figura la instruccion primaria; pero, á renglon seguido, añade también que todos los acuerdos municipales á aquella referentes necesitan la aprobacion previa del Gobernador General. El artículo 71 cita entre las atribuciones que muy especialmente le corresponden el nombramiento de sus empleados y agentes en todos los ramos, pero conforme á esta Ley y á otras especiales y hasta, al tratar de los agentes de vigilancia armados, si bien usa la locucion terminante de que dependerán exclusivamente del Alcalde en su nombramiento y separacion, el legislador declara en el preámbulo que si ha mantenido íntegro este precepto de la Ley peninsular es porque entien de que no se opona á la conservacion ó modificacion del actual Cuerpo de Orden público, sobre la base esencial de que el nombramiento y separacion de sus individuos corresponde al representante del Gobierno. Se aclaran mas y mas estos conceptos por el artículo 74 que define como atribucion de los Ayuntamientos el nombramiento y separacion de todos los empleados pagados de sus fondos, pero con las excepciones establecidas en esta Ley, y por el artículo 80 que de los acuerdos ejecutivos de los Ayuntamientos excluye solo dos asuntos que necesitan aprobacion Superior, siendo uno de ellos la reforma y supresion de establecimientos de instruccion y beneficencia, y por último, por el artículo 81 que obliga á los Ayuntamientos, en todos los asuntos que no les competen exclusivamente, á acomodarse á lo mandado no solo por las Leyes si que también por las disposiciones generales que á ellos se refieran.

A V. E. toca apreciar si el Decreto que someto á su aprobacion está inspirado en la precedente doctrina, si uno solo de sus artículos infringe alguna de las atribuciones municipales que dejo citadas con los importantes incisos que las imitan y, por fin, si el Consejo Contencioso-administrativo ha estado acertado al expresar textualmente en su informe que "mas perfecto el trabajo del Gobierno General que todas las disposiciones de índole análoga que le han precedido, crea la Escuela Normal para Maestros, 4 Escuelas-modelo para Maestras y dos plazas de Inspectores, clasifica las Escuelas de los pueblos segun la importancia de estos, introduce la novedad de las Escuelas auxiliares y rurales en sustitucion de las incompletas que hoy existen sin prestigio y sin resultados, señala dotaciones decorosas al Magisterio, aclara las atribuciones de las Juntas y de los Ayuntamientos y con estas y otras medidas tomadas de la legislacion vigente en la Península cuando ha sido posible, ó modificadas con recto juicio siempre que ha sido necesario, dá sólidas bases á la enseñanza primaria en un Decreto no extenso y todo el posible en la práctica, segun las condiciones actuales de la provincia."

Pero aun suponiendo que el presente Decreto resultase, que no lo creo (excepcion hecha de la inevitable concentracion en manos del Gobernador General de las facultades que la Ley peninsular subdivide entre el Gobernador Civil y el Rector de la Universidad), algo mas restrictivo para los Ayuntamientos que la Ley de 1857, no solo no estaría sujeto bajo el punto de vista legal, á impugnacion alguna, sino que resultaría con ello perfectamente anulado al espíritu general que informa toda la Novísima legislacion ultramarina. Esta, en efecto, si bien obedece al principio de una conveniente asimilacion, no ha admitido, hasta ahora, en ningun caso una perfecta identidad con las Leyes matrices peninsulares: prueba de ello son las Leyes provincial y municipal, la electoral y la de Imprenta, el Código penal y cuantas Peyes, en fin, se han promulgado durante los dos últimos años en esta Antilla, asimiladas todas ellas, pero ninguna igual, á las similares de que se han derivado y todas ellas también mas restrictivas.

A la objecion de que el Decreto no es Ley, responden los incisos de los artículos de la Ley municipal que obligan á los Ayuntamientos á cumplimentar no solo las Leyes, si que también los Reglamentos y disposiciones generales; y no habiéndose hecho extensiva á Puerto-Rico la Ley de 1857, ni publicándose tampoco ninguna Ley especial de instruccion pública para la Isla, claro es que no otra cosa que las disposiciones generales á que alude la Ley municipal, son las Reales órdenes comunicadas por ese Ministerio y los Decretos emanados del Gobierno General referentes al ramo. No tuvo otro origen el Decreto orgánico de 1865 publicarlo ántes de recibir la sancion Soberana; y sin embargo no solo han sido hasta ahora obedecidas sin oposicion alguna sus prescripciones, sino que, en pleno año de 1873, no obstante la casi anonimia de que disfrutaban aquellos Ayuntamientos regidos por una Ley muchos mas amplia que la actual,

el Gobierno General en Circular de 27 de Octubre de 1873 se vió en el caso de recordarles la observancia de aquel Decreto.

Expuesto lo que antecede, someto al juicio de V. E. en punto á supuesta invasion de atribuciones de los Ayuntamientos, sin desflorarla con observacion ninguna, la suma de apreciaciones que ha suscitado el Decreto por parte de la prensa y también por la de contados Ayuntamientos, de cuyos acuerdos tendré que ocuparme por separado bajo un punto de vista menos pedagógico que hoy. En ese conjunto de contradictorias opiniones, en que alguno censura hoy lo mismo que alabó ayer, otro rechaza en parte aquello mismo que pide sin conocerlo, y un tercero se adhiere á priori á opiniones que ignora, solo por suponerlas equivocadamente sustentadas por aquel — de todo lo cual tengo pruebas fehacientes — se revela tan candorosamente el mismo desconocimiento de la legislacion peninsular y se trasparente con tanta inocencia una á modo de consigna tan tardíamente transmitida como inconscientemente ejecutada, que por sí mismas se destruyen y me relevan de la menor impugnacion.

Este, además, es el único medio indirecto que se me ofrece de agradecer los elogios inmerecidos que todos, no obstante lo dicho, han tributado al trabajo del Gobierno General.

Pero, ya que no las autoriza la Ley municipal, aconseja por ventura el interés bien entendido de la enseñanza que se concedan mayores atribuciones á los Ayuntamientos? ¿alguna razon de conveniencia aboga en pró de esta pretension? ¿han acreditado acaso con hechos los Ayuntamientos que tanto mas ha progresado la instruccion primaria cuanto mas exclusiva ha sido su intervencion en el ramo?

Con gran sentimiento, Excmo. Sr., entro en esta última parte de mi argumentacion: harto mas grato me habria sido, tanto al publicar la estadística sobre instruccion, como ahora el Decreto, dejar en la sombra ciertos hechos, aludir ligera y paternalmente á ciertas negligencias é insistir únicamente, como lo hice, poniéndolo de relieve, sobre lo mucho bueno que ha hecho ya en poco tiempo la provincia para el fomento de la enseñanza. Si levanto ahora algunos velos, culpense á sí mismos los que á ello me obligan y conste que lo hago únicamente para aclarar de una vez, á los ojos del Gobierno y de la inmensa mayoría sensata del propio país, el fundamento de ciertas pretensiones.

Conviene, ante todo recordar, segun se indica en el preámbulo y al principio de este escrito, que el régimen de la enseñanza primaria en Puerto-Rico no solo no pecó de centralizador, sino que apenas se encuentra huella de la intervencion de la Autoridad Superior en dicho ramo durante el siglo pasado. Tampoco fué ella sino la Diputacion la que aprobó en 1820 la Instruccion redactada por el Regidor Don Francisco Tadeo de Rivera y la imprimió á sus expensas. Instalada en la Isla en 1834, á semejanza de la Península, la Comision provincial de enseñanza, el Gobernador Capitan General se limitó á recomendar en términos generales á los Ayuntamientos que procurasen elegir para Maestros sujetos de instruccion, moralidad y celo, pero sin reglamentar de modo alguno dicha circunstancia. Tampoco, en 1833, al constituirse las Comisiones locales de pueblos, hizo otra cosa que encargarnos convinieran con los Maestros respectivos la organizacion y plan de enseñanza de las Escuelas, dejando por consiguiente confiados todos los detalles al criterio heterogéneo de los Ayuntamientos, que no pudo dar mas pobres resultados. Hasta el año de 1845 no emprendió directamente la Autoridad Superior la organizacion del ramo, muy rudimentaria al principio y sucesivamente completada por las disposiciones, citadas en el preámbulo que ya fueron mejorando el estado general de la enseñanza. Planteado en 1866 el excelente Decreto orgánico de 1865, las reclamaciones de los Ayuntamientos fueron, como ya se ha dicho, las que obligaron á la Autoridad Superior á modificarlo suprimiendo plazas y reduciendo dotaciones.

No dejará de argüir alguno que el poco resultado hasta entonces debido á la accion de los Ayuntamientos era consecuencia del régimen colonial, que aún sin intervenir en el régimen de la enseñanza, cohibía el fructífero desarrollo de la libre iniciativa municipal.

Mas para destruir tal sofisma, basta traer á la memoria la época de la enseñanza primaria federal. Sin citar, como podría hacerlo, hechos concretos, baste decir que el nepotismo, la incuria y el desconcierto municipales llegaron entonces á tal extremo, que obligaron al Gobernador General, á pesar de las complacencias que dispensaba á aquellos Ayuntamientos, á recordarles que estaban en el deber de sujetarse para el régimen de la enseñanza á las prescripciones del Decreto de 1865.

Viniendo ya á lo de ayer, puedo añadir á V. E. que, á los ocho meses de hallarme gobernando la Isla y cuando subsistían todavía los Ayuntamientos directamente nombrados por la Autoridad Superior, el material de Escuelas en toda la Isla no podía estar mas descuidado, y por datos fidedignos se deduce que ninguna de ellas podía competir con la Escuela elemental establecida directamente por el Estado en la Colonia naciente de Fernando Póo.

Escuelas de niños encontré en las principales poblaciones de la Isla que no tenían ni un solo cuaderno de escritura y alguna solo tres ejemplares de Gramática, no obstante la reclamacion de libros por tres veces repetida por el Maestro y otras tantas transmitida al Ayuntamiento, pero inútilmente, por la Junta local. En alguna Escuela de niñas la Maestra se veía reducida á enseñar la Gramática á la voz por el solo texto manuscrito que poseía.

Pero, hoy mismo, Excmo. Sr., con Ayuntamientos elegidos por el voto popular, á muchos de los cuales hago una vez mas la justicia de confesar que se ocupan activamente del asunto, y me ayudan á remediar tan lamentable estado de cosas; hoy mismo, sin embargo, de 1,618 niños concurrentes á las Escuelas de una poblacion de las mas importantes de la Isla, solo 673 tienen asiento en que sentarse; si esto